

1869, se resuelve: Se confirma la sentencia del Juez 2º de Distrito de esta capital pronunciada á 16 de Agosto último, en la que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Pedro Rodriguez por haberse efectuado en su persona, en el caso, violacion de la garantía que consigna el art. 22 Constitucional.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 8 de Octubre de 1873.—*Lic. Enrique Landa.*—oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Chiapas por el Lic. D. Clemente Francisco Robles, quejándose de que el Juez de primera Instancia de Comitán ha exhortado al del ramo criminal de San Cristóbal las Casas, para que remita preso al quejoso como acusado en una causa, sobre calumnia.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito: El Promotor fiscal en este juicio de amparo promovido ante V. por el C. Lic. Clemente F.

Robles, por haber el C. Juez de 1ª Instancia del Departamento de Comitán exhortado al del ramo criminal de este del centro, para que lo remitiese preso á su presencia, por una pretendida causa de calumnia que infundadamente se alegó en su contra, como en el curso de las diligencias se demostró, supuesto que su estado es el de alegar de buena prueba, ante V. dice: que por el informe justificado del Juez ejecutor, por las abundantes y fehacientes pruebas que la parte rindió, y por las razones que pasa á demostrar, aunque con brevedad, es indudable que el recurso de amparo que de la justicia federal impetra, se le debe otorgar, haciendo valer en su ocurso que con tal procedimiento se viola en su persona el art. 11 de la Carta fundamental, como pasa á demostrar, siendo las palabras textuales de dicho artículo, las siguientes: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento etc." Este, como á primera vista se nota, se ha barrenado, toda vez que se arrastra á un ciudadano que se hallaba pacífico en su hogar doméstico, á contestar cargos ante un Juez que lo ha pedido por un simple exhorto que no está concebido en los términos precisos que el mismo artículo constitucional exige para ser válido y que se explican debidamente en la suprema circular de 30 de Noviembre del año próximo anterior, pues aunque en él se dice que se le juzga por delito de calumnia, no ha consignado de ninguna manera en estas palabras, el fundamento legal con que procedía; fundamento, que, según aquella, es indispensable para dar cumplimiento á dicho exhorto, y difícil de consignarlo en éste, cuando desde el principio se careció y se carece aún de pruebas acerca del hecho imputado.

Esta sola falta, atenta la suprema disposicion citada, era lo bastante para acor-

dar al solicitante el recurso interpuesto, y lo que movió con cordura al Juzgado para mandar suspender provisionalmente la providencia que le atacaba, haciendo suspender la pesquisa del Juez, prescindiendo por entonces de analizar la duda de si dicha requisitoria procedía ó no de una autoridad legítima para el caso, por cuanto no toda persona que ejerce autoridad puede expedir tales documentos, aun contra los individuos que se hallan fuera del alcance de su jurisdicción, sino solo la competente para cada caso.

Lo que antes era un punto dado, una presunción vehemente, se convirtió, después de la prueba, en una manifestación legal, atendiendo como debe atenderse, á las que la parte adujo. De ellas, sin hacer mérito de las faltas y vacíos que se notan en los procesos que en copia corren agregados á estas diligencias, por ser objeto de la inquisición de la autoridad superior ordinaria, consta, sí, y de lo que depende en gran manera la decisión del recurso: que en el que se ha llamado proceso por calumnia contra el C. Lic. Robles, y por el que fué exhortado, no existe el mas ligero indicio de culpabilidad que le condene, pues todo se concreta á una acusación vacía que D. Diodoro Quintana le hace, dizque por haber sido el abogado director de D^a Domitila Santamaría, quien le acusó de extracción de sus intereses en la finca de Nuestra Señora, durante el juicio de posesión: que en el que se sigue contra este último, consta el mismo aserto, segun la certificación de ese Juzgado que se lee á fojas 49 vuelta: que el auto de prisión proveído por los Jueces asociados de Comitán, esto es, para llevarlo preso con la custodia necesaria á aquel punto, es ilegal por haber sido consultado por un asesor inhábil, el Lic. D. José Peña, que segun el auto de 2 de Agosto del año próximo pasado, fojas 32 vuelta, se halla procesado y privado por consiguiente de los derechos de ciudadano, como se evidenciaba de la compulsión librada por

TOMO V.—PARTE II.

la 3^a Sala del Tribunal de Justicia, visible á fojas 29 vuelta; hecho que enjendra una nulidad de pleno derecho, que unida á los defectos que circundan para este caso, á los Jueces exhortantes, resulta un atentado que despoja al hombre del derecho mas recomendable y privilegiado que tiene garantizado por la Carta fundamental, cual es el respeto inviolable de su libertad.

Empero si todo esto es de obvia decisión y grave peso para la resolución del caso, no son menos atendibles las observaciones que segun Doña Domitila Santamaría que es quien acusó á D. Diodoro Quintana, acusador del C. Lic. Robles, en ningun caso puede ser delincuente defendiendo los derechos de sus menores hijos, aun cuando careciera de justicia para ello, puesto que se encuentra en el imprescindible deber de hacerlo, creyendo que la tiene de su parte. Si pues á esta Señora no puede llamársele reo de falsa calumnia, no ha habido hasta ahora quien ose darle este epíteto como quiere llamársele y como quiere llamársele su cómplice al Lic. Robles, que solo atendiendo á su confesión, ha sido su abogado director, y que no habiendo reo principal no puede tampoco haber cómplices, lo que en sentido contrario equivaldria á afirmar que pudiera darse un efecto sin causa ó que pudiera encontrarse un fiador, sin haber deudor principal? Hay mas: el auto de sobreseimiento que recayó en la causa que se sigue á dicho Sr. Quintana, no está confirmado por el Superior Tribunal, fojas 69, quien no es remoto que lo revoque al ser ciertas las infracciones que se le atribuyen y aparecen, y en este caso, ¿qué sucederia? que Quintana siendo el reo del delito que acusa, aparecía acusando, no á su acusadora contra quien debiera dirigirse, sino contra el que supone su cómplice, y contra quien no aparecen mas datos, que el deber que contrajo como abogado, de impartir su protección al infeliz que se la solicita; y aun cuando dicho auto sea confirmado, el C. Lic. Robles no tiene mas responsabili-

dad, que la que encadena su conciencia y la que su cliente pudiera exigirle en su caso, pero de ninguna manera se entiende aquella á responder de los actos de sus patrocinados, que fué la acusadora de Quintana.

Por todos estos fundamentos que el fiscal los cree basados en la justicia, y porque tambien cree que con dicho procedimiento se ha violado el artículo 16 de la Constitucion federal, concluye pidiendo al digno Juzgado de su merced cargo, se sirva decretar: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Lic. Clemente F. Robles, contra los procedimientos del C. Juez de 1ª Instancia de Comitán y su asociado llevados al cabo por el del ramo criminal de esta ciudad, para que no sea molestado en su persona como se ha pretendido.

San Cristóbal las Casas, Junio 24 de 1873. (Firmado) *Carlos Ballinas*. Es copia. San Cristóbal las Casas, Julio 7 de 1873. *J. Crisóstomo Lara*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Juzgado de Distrito de Chiapas. San Cristóbal las Casas, Junio 28 de 1873.—Vistos:—El C. Lic. Clemente Francisco Robles, se presentó á este Juzgado de Distrito en 30 de Mayo del corriente año pidiendo proteccion y amparo á la justicia federal, contra los procedimientos del Juez de 1ª Instancia del ramo de lo criminal de este Departamento, quien pretendia reducirlo á prision en cumplimiento de exhorto que al efecto le cometieron, previo dictámen de asesor, los Jueces conjuntos de 1ª Instancia del Partido de Comitán, C. C. Vicente García y Félix Parada, con motivo de acusacion hecha en contra del quejoso, por el C. Diodoro Quintana, en deducción de los derechos que á éste le dejó á salvo, para perseguir á Doña Domitila Santamaría y á quienes mas hubiese lugar

como falsos calumniadores, un auto de sobreseimiento dictado en la causa que se le instruyó á petición de dicha Sra. Santamaría por delito de hurto de algunos de los llanos de la finca de Nuestra Señora, que embargada provisionalmente, se dió en posesion interina al C. Quintana.

El interesado interpuso formal instancia para que se suspendiesen desde luego los procedimientos reclamados, y así se hizo provisionalmente por auto de 30 de Mayo último, á reserva del resultado definitivo del presente recurso de amparo, atento á la notoria urgencia del caso, y con fundamento de la segunda parte del art. 39 y del 6º de la ley reglamentaria de 20 de Enero de 1869. En este estado y para definir la cuestion principal, se pidió informes á la autoridad correspondiente, habiendo manifestado: que el C. Quintana acusó al C. Robles ante el Juzgado de 1ª Instancia del Partido de Comitán del delito de calumnia, por haber dirigido á Doña Domitila Santamaría en la causa que se instruyó á aquel, decretándose el comparendo del C. Robles á su prision, caso de no emprender su marcha: que este hizo observaciones á la providencia, en cuyo concepto se consultó la medida que debia dictarse, recusando el C. Robles al asesor nombrado, que despues se declaró hábil por otro abogado, pasándosele en consecuencia el expediente respectivo, de cuyo paradero no dá razon el Juez informante, porque el abogado consultor, ya no se sirvió del órgano del propio Juzgado para devolverlo conforme está prevenido por la ley, sino que lo devolvió, á lo que entiendo, por otro medio, recibiendo en seguida el exhorto que en copia acompaña y que ha dado margen al presente juicio.

Corrido el traslado respectivo al C. Promotor fiscal, éste, pidió se abriese á prueba; lo cual verificado, se han aducido en tiempo y como tales por la parte actora:

Copia certificada de un auto de formal prision decretado en 2 de Agosto de 1872, por el Juzgado de 1ª Instancia del ramo

de lo criminal de este Departamento, contra el abogado que consultó en la acusación hecha por el C. Quintana al C. Robles, fojas 31 vuelta y 32 cara.

Copia certificada de un fallo de la 3ª Sala del Superior Tribunal de Justicia del Estado, emitido en 11 de Enero del presente año, en el recurso de apelación interpuesto por la parte interesada en contra del auto antes mencionado de formal prisión, en el cual se resolvió: "Que son de suspenderse y se suspenden, los efectos del auto de formal prisión apelado, subsistiendo los presuntos culpables en libertad, bajo la fianza que tienen otorgada, entre tanto se subsanan conforme á derecho los defectos que contiene, tanto por el carácter de las diligencias que lo motivaron, como por la calidad del Juzgado que lo proveyó, á fin de no hacer ilusorias la acción de la ley, atribuciones de la autoridad en su propia competencia y garantías de los interesados, todo sin perjuicio de lo dictaminado en su favor por causa de enfermedad." fojas 43 á 45 vuelta.

Testimonio de dos exposiciones presentadas por el interesado al Juez de 1ª Instancia del ramo de lo criminal de este Departamento, y á la 3ª Sala del Superior Tribunal de Justicia, preguntando si una ó otra habian dictado providencia alguna que innovara el estado de libertad, en que el expresado asesor habia quedado por consecuencia del fallo citado de 11 de Enero, y en las cuales el primero resolvió negativamente, y la segunda: "Que el Lic. José Joaquín Peña se halla comprendido en la fracción 5ª del artículo 13 de la Constitución del Estado" fojas 27 á 30.

Certificado de la Secretaría de Cámara del Superior Tribunal de Justicia, y dos informes de los Jueces de 1ª Instancia de los ramos de lo civil y de lo criminal de este Departamento, relativos á la existencia de una resolución dictada en 19 de Marzo de 1872 por aquella Superioridad, en la que se determina que los Jueces legos de-

ben sujetarse necesariamente á lo consultado por los asesores, salvo en los juicios verbales y en los autos de formal prisión. fojas 65 68 y 69.

Informe de la 2ª Sala del mismo Superior Tribunal de Justicia, en que se expresa, mediante escritura de este Juzgado, y á instancia de parte: "Que el Juzgado de 1ª Instancia del Partido de Comitán, sobreyó en la causa que por hurto seguía contra Diodoro Quintana y cómplices; y que pasada á esta misma Sala por recusación que Doña Domitila Santamaría hizo al C. Magistrado de la 3ª á quien habia tocado en turno, no se ha pronunciado hasta ahora auto ninguno que apruebe ó revoque el sobreseimiento referido, fojas 67.

Un certificado de honrosa conducta como escribano público, abogado de los tribunales de la República, asesor del ramo de lo civil y protector de indígenas, librado por la secretaría de Cámara del Superior Tribunal de Justicia, con presencia de las constancias correspondientes, fojas 41.

Copia certificada de un auto en la causa civil seguida entre Doña Domitila Santamaría y Doña Petra Quezada, en que el Juez C. Pedro Viver se excusó por ser pariente del C. Moisés Rojas, hijo de la segunda de las expresadas Señoras, de otro auto en que se declara con lugar las excusas del C. Pedro Viver, y de otro en que éste se declara competente para conocer en lo propia causa, fojas 40.

Copia certificada de tres autos; el primero, de formal prisión contra los CC. Diodoro Quintana y Nazario Escobedo, dictado por los Jueces conjuntos CC. Vicente García y José Nicolás Domínguez; el segundo, el en que se puso en libertad á D. Diodoro Quintana, en 26 de Agosto de 1872 por los Jueces CC. Moisés Rojas y Pedro J. Viver; y el tercero, el en que los CC. Jueces Vicente García y Amado Abel Domínguez, mandaron á consulta del Superior Tribunal de Justicia, el auto de sobreseimiento decretado en la causa de Quintana

y otras varias y diversas constancias, relativas á la justificación del interesado.

Terminado el plazo probatorio, las partes han presentado en tiempo sus alegatos, y hallándose este negocio en estado de sentencia, se hace necesario, para emitirla con verdadero conocimiento de causa y en términos de justicia, considerar:

Primero: que sobreseida la causa que á instancia de Doña Domitila Santamaría se instruyó por hurto, contra el C. Diodoro Quintana y cómplices, y no habiéndose confirmado el auto de sobreseimiento por la Superioridad, la instancia de éste para repetir las acciones civiles y criminales contra aquella ó sus cómplices, que dicho auto le dejó á salvo, no puede ni debe estimarse procedente.

Segundo: que habiendo ejercitado la Sra. Santamaría la acción de hurto en defensa de los intereses que dice pertenecen á sus hijos aun cuando no se conceptúan probadas sus intenciones, es de aquellas personas contra quienes por las mismas circunstancias del caso, no puede legalmente deducirse la acción de falsa calumnia.

Tercero: que si la Sra. Santamaría acusadora del C. Quintana, no es de reputarse en concepto de lo espuesto, reo de calumnia, no habiendo agente principal, no puede sostenerse que existan cómplices.

Cuarto: que si bien con este carácter se ha acusado de calumnia al C. Clemente F. Robles, dando por cierto que lo es, de la Sra. Santamaría, en la acusación hecha por ésta al C. Quintana; constando de autos, fuera de lo espuesto, que en dicha acusación no ha tenido participio como testigo, apoderado, defensor ó abogado, y que por lo mismo, no representa en ellos entidad alguna característica, no puede ni debellaarse cómplice de la Sra. Santamaría.

Quinto: que así mismo aunque su acusador le llama cómplice ó instigador de ésta, fuera de no hallarse probadas semejantes especies, suponiéndolo tal, y cuando mas con un carácter puramente privado,

tendría la responsabilidad moral, mas no la responsabilidad civil de sus hechos, que solo podría hacerse efectiva, en su caso por la interesada, si así lo creyera conveniente, por lo que importara á su dirección.

Sexto: que además, declarado con anterioridad formalmente preso el abogado que consultó la prisión del C. Robles, y resuelto por la 3ª Sala del Superior Tribunal de Justicia del Estado, que se halla comprendido en la fracción 3ª del artículo 13 de la Constitución del mismo, que dice: "Art. 13: se suspende el ejercicio de los derechos de ciudadano.—Y por hallarse procesado criminalmente, desde que se decreta la prisión con las formalidades de la ley, ó el auto de haber lugar á la formación de la causa en los juicios de responsabilidad, hasta la sentencia absolutoria;" la consulta así emitida fuera de reconocer un origen viciado é in-moral, es nula de pleno derecho, debiendo en consecuencia ser nulo todo lo que en su virtud se practique.

Sétimo: que aunque fuera de decirse que el Juzgado que acordó la providencia de prisión, lo hizo en virtud de sus facultades naturales y ordinarias, y sin respisencia alguna á lo consultado, estando resuelto que los jueces legos se sometan necesariamente á lo consultado por los asesores, y habiendo faltado por esto la libertad indispensable al referido Juzgado, es de entenderse que su determinación ha sido fruto indeclinable del dictámen del abogado consultor.

Octavo: que si bien los juicios de amparo, no proceden por lo comun en los negocios del orden judicial, no puede decirse otro tanto del actual, que carece de aquel carácter, por que no es ni puede decirse negocio judicial, una orden de prisión, tan solo por que sea Juez el que la dicte.

Noveno y último: que por lo expuesto, bien se comprende, que el exhorto ó lo que es lo mismo, la orden de prisión librada en contra del C. Clemente F. Robles, por el Juzgado de 1ª instancia del Partido de Comitan, carece de razon de ser, 1ª: por la

incompetencia de este, pues tanto importa para el caso no poder conocer de la causa de un ciudadano, por ser de ajenajurisdiccion, que no tener facultades para hacerlo; 2º: por falta de motivos de legítima procedencia, que funden la causa legal del procedimiento; en cuyo concepto debe reputarse con dicha Orden, violada la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitucion general de la República.

Por todo lo cual, y bien visto y considerado cuanto verso y considerarse debía; de conformidad con lo pedido por el Ministerio público, y con fundamento de las prescripciones relativas de la propia Constitucion y de la ley reglamentaria de 20 de Enero de 1869, este Juzgado falla con las siguientes proposiciones. Primera: la Justicia de la Union ampara y protege al C. Lic. Clemente Francisco Robles, contra la providencia de prision librada por el Juzgado de 1ª instancia del Partido de Comitán en 27 de Mayo último, y cometido para su cumplimiento al del ramo de lo criminal de este Departamento. Segunda: hágase saber á quienes corresponda; compúlsese copia certificada del pedimento fiscal anterior y de esta resolucio, para que se publique como está mandado, y dese cuenta con estas actuaciones á la Corte Suprema de Justicia para su revision.

Así lo proveyó, mandó y firmó el C. Juez de Distrito propietario, ante los de asistencia que certificamos, por impedimento del escribano del despacho.—*Juan J. Ramirez.*
—De asistencia.—*M. A. Utrilla.*—De asistencia.—*Francisco Santiago.*

Es copia. San Cristobal Las Casas, Julio 7 de 1873.—*J. Crisóstomo Lara.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 26 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 30 de Mayo del corriente año, promovió en San Cristó-

bal las Casas, ante el Juez de Distrito del Estado de Chiapas, el Lic. Don Clemente Francisco Robles, quejándose de que el Juez de 1ª instancia de Comitán ha exhortado al del ramo criminal de San Cristóbal las Casas, para que remita preso al quejoso como acusado en una causa sobre calumnia, con cuyos procedimientos llevados á ejecucion, sostiene el promovente que se ha violado en su persona la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitucion federal.

Vistas las constancias de autos y teniendo en consideracion: que la incompetencia del Juez de quien procede la disposicion que se reclama, no está demostrada segun manda el derecho, y que en consecuencia, no aparece fundada cual pretende el quejoso, la violacion de la garantía que invoca citando el artículo 16 constitucional; con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve; primero: se revoca la sentencia que pronunció el Juez de Distrito del Estado de Chiapas, en San Cristóbal las Casas á 28 de Junio próximo pasado, en cuya sentencia declara: que la Justicia de la Union federal ampara y protege al C. Clemente Francisco Robles, contra la providencia de prision librada por el Juzgado de 1ª instancia del partido de Comitán en 27 de Mayo último y cometida para su cumplimiento al del ramo de lo criminal del departamento de San Cristóbal las Casas. Segundo: la Justicia de la Union no ampara ni protege al referido C. Robles, contra los procedimientos que motivaron el presente recurso.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoria de votos los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*
—*Pedro Ogazon.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*

—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—
M. Zavala.—José García Ramírez.—En-
rique Lanza, secretario.

Es copia. México, Diciembre 9 de 1873.

—Lic Emilio Ordaz, oficial mayor interino.

COMPETENCIA.

Promovida por el Juez 3º de lo civil de México al de 1ª instancia del Canton de Veracruz, para conocer de la demanda que D. Francisco Prida ha entablado contra la empresa del Ferrocarril, en la estacion situada en dicha ciudad.

PEDIMENTO DEL FISCAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

El Fiscal dice: que D. Francisco Prida se presentó ante el Juzgado de 1ª instancia del Canton de Veracruz, demandando en conciliacion al superintendente que en esa estacion tiene la empresa del Ferrocarril, la cantidad de cuatro mil pesos, como indemnizacion de daños y perjuicios por no haber querido dicho superintendente se trasportara la carga que el expresado Prida había entregado para su conduccion á esta Capital. El superintendente D. Alonso Ridley, no concurrió á la conciliacion, y habiendo sido citado para el juicio, contestó: que habiendo comunicado á la Direccion la cita, la empresa le había manifestado que no siendo el superintendente Ridley apoderado de la empresa, y teniendo el legítimo representante su domicilio en la Capital, no debía aquel empleado contestar á la demanda de Prida.

En este punto el negocio, y á solicitud del Lic. D. Emilio Pardo por D. D. G. B. Crowley, encargado de la exportacion del Ferrocarril Mexicano, el Juzgado 3º de lo civil libró exhorto al de 1ª instancia de Veracruz, para que se abstuviera de conocer de la demanda intentada por Prida, y en

caso de no acceder, diera por promovida la correspondiente competencia. El Juez requerido no se conformó con las razones del requerente y ambos han remitido sus actuaciones á esa Suprema Corte, á fin de que dirima el conflicto jurisdiccional que ha surgido. El Fiscal al examinar la presente cuestion, se inclina á las razones del Juez de 1ª instancia de Veracruz, por mas que el de México, ó mejor dicho la parte que sostiene la jurisdiccion de este Juez, quiera ver en los empleados de Veracruz, unos meros factores en la rigidez que el derecho mercantil dá á esa palabra.

El principio de derecho que enseña: *distingue tiempos y concorda los derechos*, no debe perderse nunca de vista al tratar ciertas cuestiones jurídicas. En efecto, esos factores de que hablan nuestros antiguos Códigos tomando sus doctrinas del derecho Romano, no son estrictamente lo que son hoy ciertos empleados de las negociaciones mercantiles. Antiguamente el comercio, circunscrito á las operaciones que se conocian en la época en que aquellos Códigos se promulgaron, no había tomado las proporciones colosales que hoy tiene: sobre todo, las empresas nunca tuvieron la inmensa importancia comercial que tienen, y la órbita inmensa en que giran. Así hoy día se ven empresas que teniendo la casa matriz en un continente, tiene sus sucursales en otros. Como otras que establecida la casa principal en México, tienen sus casas secundarias estendidas en muchas poblaciones y capitales de la República. Y sin embargo de que todos los empleados en esas casas contratan, comercian y gestionan en nombre de la casa matriz y para su provecho, las demandas sobre cumplimiento de contrato hecho por alguno de ellos, no se llevan á la casa principal, sino ante el Juez donde esté situada la casa que directamente contrató.

Discurrir de otra manera, equivaldría á que un habitante de México, que trata y contrata con cualesquiera de las muchas secundarias que hay en México, pero la prin-